1
7/34
111
108

RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & McKENZIE

AVENIDA 82 No. 10-62, 6° PISO
TELÉFONO: (57-1) 634-1500
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
WWW.BAKERNE
OFFICE.BOGOTA@B

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00003458 00000006
Fecha (AMD): 2002-07-09 16:41:32 Folios: 34
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 412 REPOSIC -
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SECCION NUEVAS CREACIONES
E. S. D

Re: **Expediente No. 00-3458**
Solicitud de Patente de Invención titulada:
"METODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES DE CORRAL".
Solicitante: **DUCOA, LP.**

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad DUCOA, LP., manifiesto que interpongo RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolución No. 16194 de fecha 28 de mayo 2002, notificada por edicto desfijado el 2 de julio de 2002, con el propósito que la mima sea revocada en su totalidad.

I. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención en referencia.

101
112

II. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente en cuestión fue presentada el día 21 de Enero de 2000.

2. Mediante el auto 0130 notificado el 9 de marzo de 2000, la División de Nuevas Creaciones requirió al suscrito que complementara su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos.

3. Dicho requerimiento fue atendido el día 7 de junio de 2000, dentro del término legal, dando cumplimiento a las observaciones de carácter técnico y, según el Despacho, parcialmente a las observaciones de carácter jurídico.

4. Respecto a las observaciones jurídicas, declara el Despacho que el solicitante no aportó un escrito donde el apoderado principal sustituyera expresamente el poder al suscrito. En consecuencia, el Despacho consideró ante la supuesta falta de los requisitos jurídicos establecidos en los artículos 66 y subsiguientes del C.P.C., debía declarar abandonada la presente solicitud en los términos del artículo 22 de la Decisión 344."

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Como fundamento del presente recurso me permito manifestar lo siguiente:

1. El artículo 66 del C.P.C. establece "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden. ... La sustitución a diferente abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por motivo o no quieran ejercer el poder; ..."

2. La anterior norma tiene dos objetos: en primer lugar, que solamente exista un representante actuando como tal durante todo momento del proceso, para efectos de garantizar que durante el trámite, sólo un abogado ejerza las obligaciones y derechos de la parte que representa. En segundo lugar, la norma prevé que para el caso en que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, se respete un orden jerárquico entre los mismos según como aparezcan listados en el poder conferido, esto con el fin de evitar que pueda existir confusión ante la falta de pronunciamiento tácito o

expreso[1] sobre cual de los apoderados ejerce la facultad de representación de la parte involucrada en el trámite o proceso. Sin embargo, la anterior previsión no resulta aplicable para el evento en que actúa de manera inicial uno de los apoderados, cuando previamente no ha obrado como tal, quien hubiera sido considerado apoderado principal ante la falta de un pronunciamiento expreso o tácito sobre el particular (e.j. la firma de un formulario de solicitud para dar inicio a un trámite), como en esta ocasión lo exige el Despacho en la resolución impugnada.

El mismo artículo 66 establece exactamente lo expuesto, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos[2], razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más, cuando el apoderado que se consideraría principal, no ha obrado nunca dentro del trámite administrativo. Es decir, el artículo 66 establece dicha previsión para efectos de que, ante la ausencia de pronunciamiento expreso o tácito determinando quién de los facultados va a ejercer la representación inicial del poderdante, se tenga como apoderado principal a aquel que en el documento aparezca listado en primer lugar. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto, resulta claro que éste concedía facultades idénticas, sin importar su orden de mención, a todos los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo sugiere razonablemente el membrete), sin importar su orden.

El documento de poder constituye solo una prueba de la existencia de un mandato conferido, el cual sólo se entiende aceptado por quien lo firma o lo presenta ante la autoridad directora del trámite judicial o administrativo solicitando el reconocimiento de personería jurídica para ejercer la representación del poderdante. En este caso el poder solo puede entenderse aceptado por el suscrito, quien con facultades idénticas a las conferidas para los demás abogados listados dentro del documento fue el único que lo presentó para efectos de ejercer la representación del titular de la solicitud de la patente en cuestión manifestando de esta manera una aceptación tácita del mandato contenido en el documento mencionado.

---

[1] La aceptación de un mandato puede ser expresa o tácita, o sea que puede manifestarla el procurador de manera inequívoca, con palabras que no den lugar a dudas, o también **deducirse de su comportamiento, cuando se encamina a realizar o ejecutar los actos jurídicos a que se refiere el encargo**. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 11 de diciembre de 1986.)

A través de las Resoluciones 3037, 3034, 3041, 3043 y 3035 se decidieron los recursos de reposición presentados en contra de las resoluciones 27349, 27345, 27343, 27333 y 27347 de 2000 respectivamente, mediante las cuales se habían declarado abandonadas las solicitudes de patente de los expedientes citados. Mediante dichas resoluciones, se ordenó la revocatoria de las resoluciones impugnadas y la continuación del trámite administrativo correspondiente.

Las decisiones de la Superintendencia, en tal momento, se basaron en la siguientes consideraciones, que aceptan parte de los argumentos ahora esgrimidos en el presente recurso:

> " (...) ante la carencia del presente escrito de sustitución, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad, ha debido la administración hacer el requerimiento en tal sentido en aras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el abandono de la solicitud.
> Así las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solicitud, la actuación que correspondía era el requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que señala la ley, lo que ciertamente no se hizo.
> Encuentra entonces este despacho, que no se actuó conforme a dicha disposición para así evitar una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por lo tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente. (...)
> Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia razón jurídica válida para acceder a la revocatoria planteada y ordenar la consecuente continuación del trámite."

Nótese que esta posición, basada en el principio constitucional de eficacia que debe regir toda actuación administrativa, difiere por completo de la posición adoptada por la Superintendencia en el trámite que nos ocupa y que no existe en este momento una condición que permita ofrecer para esta situación una solución de derecho distinta de la propuesta y adoptada por ese honorable Despacho ante dichos eventos.

7. Finalmente, valga la pena señalar que, aun sin compartir la posición del Despacho, adjunto una sustitución del Dr. Alvaro Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica la actuación del suscrito hasta la fecha. Espero igualmente que el Despacho considere que con este documento se da cumplimiento a la formalidad exigida en la

H5
118

resolución impugnada y proceda a la revocatoria de la misma, y consecuentemente ordene la continuación del trámite para la solicitud de la referencia.

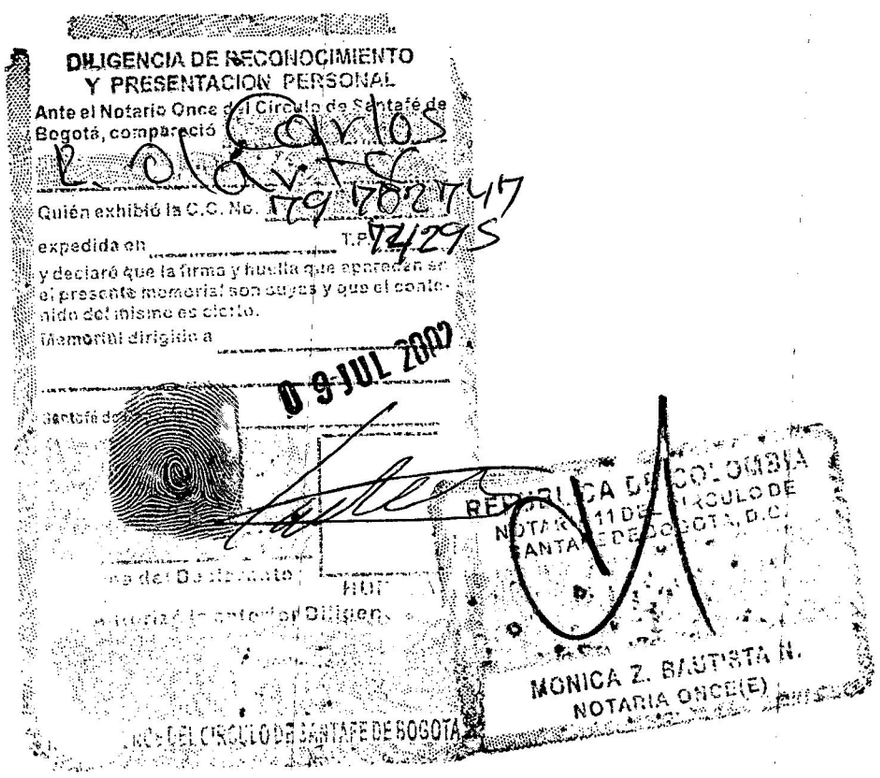
IV. NOTIFICACION

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 #10-62, Piso 6 de Bogotá.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74295
Avenida 82 #10-62 Piso 6
Teléfono: 6449595

Anexos: Sustitución
Resoluciones 3037, 3034, 3041, 3043 y 3035 Superintendencia de Industria y Comercio.



4
116
119

RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & McKENZIE

AVENIDA 82 No. 10-62, 6° PISO
TELÉFONO: (57-1) 634-1500
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
WWW.BAKERNET.COM
OFFICE.BOGOTA@BAKERNET.COM

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.003.458
Solicitud de Patente de Invención titulada:
"METODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES DE CORRAL".
Solicitante : DUCOA, LP.

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, mayor y vecino de Bogotá. D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi carácter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me permito manifestar que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido por la mencionada sociedad en el doctor **CARLOS R. OLARTE** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.782.747 de Bogotá y con la Tarjeta Profesional número 74.295.

El apoderado sustituto queda con las mismas facultades del principal.

Atentamente,

ALVARO CORREA-ORDOÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. No. 20.281

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL

Ante el Notario Once del Círculo de Santafé de Bogotá, compareció Alvaro Cerco Orcon 2

Quién exhibió la C.C. No. 7174366

expedida en _____ T.P. 7028

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente memorial son suyas y que el contenido del mismo es cierto

Memorial dirigido a Interesado

Santafé de Bogotá, D.C. 09 JUL 2002

Firma del Declarante

HUELLA

Autorizó la anterior Diligencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

MONICA X. BAUTISTA N.
NOTARIA ONCE(E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 3037

Por la cual se resuelve un recurso

11 ABR 2001

26 ABR 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

PROCESADO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 27349 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó archivar la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2001 bajo el número 99019541 00000004, el doctor Carlos R. Olarte, interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque la mencionada resolución y en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención de la referencia, y se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Carlos R. Olarte, luego de transcribir el artículo 66 del código de procedimiento civil , que dicha norma tiene "dos propósitos aparentes: primero, la ley desea que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, en principio para consolidar en un solo abogado las obligaciones y derechos de la parte representada; y segundo, en el caso que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, la ley establece un orden jerárquico entre los abogados listados. Sin embargo, no resulta claro si, para que actúe de manera inicial uno de los sustitutos sin que obre el apoderado principal, se requiera que el principal expida una sustitución expresa, como lo exige el Despacho en la resolución impugnada. El mismo artículo 66 parece establecer lo contrario, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos, razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más cuando el apoderado principal no ha obrado en el trámite administrativo. Es decir, el artículo 66 parece permitir una sustitución implícita, al menos cuando actúa por primera vez uno de los apoderados sustitutos, entendiéndose que el principal siempre podría reasumir el poder. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto resulta claro que éste concedía facultades a cualesquiera de los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo sugiere razonablemente el membrete), sin importar su orden."

Señala por otra parte, que "La posición esbozada por el Despacho en la resolución impugnada se aparta de manera inesperada de aquella establecida en casos anteriores, donde con los mismos hechos consideraba que no era necesario aportar la sustitución ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave inseguridad jurídica, en tanto una modificación tan radical en la práctica reiterada del Despacho, sin previo aviso, no puede sino causar trauma entre los administrados, quienes antes de una fecha creen que están cumpliendo con los criterios del Despacho, y de un momento para otro se les cambia sorprendentemente las reglas del juego. Para ilustración del Despacho, me permito aportar dos casos como ejemplos donde el Examinador Jurídico aceptó el Documento de Poder a nombre de Pfizer Products Inc. como válido sin requerir

en ningún momento la sustitución que ahora constituye el único motivo de abandono para esta solicitud. En el expediente No 99.077.825 se allegó el poder el día de la presentación de la solicitud, y en el primer auto de forma el Examinador Jurídico no hizo comentario alguno sobre el poder allegado. En el segundo caso, ventilado dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Jurídico, aparentemente a pesar de revisar el poder allegado –objetándolo en cuanto a la traducción-, no requirió la presentación de una sustitución."

Señala por otra parte que la actuación del Despacho resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 83 y 209 de la Constitución política, artículos que en su opinión deben "ser tenidos como el marco de referencia de acción de la Administración Pública, en este caso, de la SIC al acometer los procesos de estudio y aprobación de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administración a comportarse de tal forma que respete la presunción de buena fe del solicitante y adicionalmente a observar un trámite eficaz. Tenido en cuenta lo anterior, el Despacho pudo perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para sanear el requisito formal presuntamente incompleto. Por el contrario, habiendo podido tomar esta vía, menos onerosa y más eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, el Despacho en cambio se apresuró a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi apoderada."

Anota también que "la SIC vulneró con la conducta descrita en el numeral anterior, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2, 3 y 12 del Código Contencioso Administrativo...Las anteriores normas, en desarrollo del artículo 209 y 83 de la Constitución Nacional, claramente obligan a la Administración a remover los obstáculos puramente formales –como la ausencia del documento de sustitución- para hacer efectivos los derechos de los administrados, evitando decisiones inhibitorias como la contenida en la resolución impugnada. Aceptando una vez más en gracia de discusión que la sustitución era un documento sin el cual no se podía decidir, en aras de preservar el principio constitucional de eficacia desarrollado en estas normas administrativas, bastaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, o como un requerimiento contenido en un examen de fondo de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 344 (o el artículo 45 de la nueva Decisión 486), se le hubiera dado la oportunidad al suscrito para que ratificara la actuación adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requerimiento de la sustitución."

Finaliza su argumentación señalando que, "Es interesante acudir también al artículo 4 del C.P.C., que se refiere a la interpretación de las normas procesales: 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...' Este artículo desarrolla el mandato del artículo 228 de la Constitución, texto que igualmente respeta la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y que tuvo como fundamento evitar las sentencias inhibitorias, en abstracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencia del descuido en el saneamiento de las formas. La Corte Constitucional arroja un norte importante sobre la diferencia entre formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228: 'Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales... sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanin Griffenstein)' Es decir, ciertamente existen formalidades que deben cumplirse –como lo puede ser el aporte de una sustitución en este caso-, pero lo que advierte la Corte es que, en el evento de su ausencia, el fallador debe buscar su saneamiento y evitar que dicha ausencia sea el motivo de la declaración de abandono de un trámite. El propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentra precisamente el de evitar

nulidades y providencias inhibitorias (Art. 37, ordinal 4). En este caso, como lo he manifestado anteriormente, el Despacho tiene las herramientas procesales para haber solicitado formalmente el saneamiento de una formalidad que se consideró no cumplida...Finalmente, valga la pena señalar que adjunto una sustitución del Dr. Alvaro Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica la actuación del suscrito hasta la fecha. Espero igualmente que el Despacho considere que con este documento se esté dando cumplimiento con la formalidad exigida en la resolución impugnada".

ARTICULO TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 344 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria aplicable al caso en estudio por ser la vigente al momento de expedirse el acto administrativo que se impugna, establece que: "Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud".

Conforme lo dispone el artículo 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros." Por su parte, el artículo 4 del Decreto 117 de 1994 señala, con referencia al citado artículo 14, como "Requisitos adicionales de la solicitud...g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria".

Por su parte en el artículo 66 del código de procedimiento civil se establece que: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden ...

" La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal podrá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito...."

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con formación de imágenes para el diagnóstico de trombosis.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mencionándose desde un comienzo como apoderado de la sociedad solicitante, Pfizer Products Inc., al doctor Carlos R. Olarte, no se allega poder que lo faculte para actuar, ni acreditación de la existencia y representación de dicha solicitante,

por lo anterior y en seguimiento del trámite administrativo se efectuó requerimiento en el mismo sentido, es decir para que acreditara personería para actuar. En este caso hubo además observaciones de carácter técnico formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestación del recurrente según la cual la disposición del artículo 66 tiene como propósito determinar que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, comparte esta Oficina la apreciación del recurrente, como también que la ley permite que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados. No obstante, no comparte la posición del doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, a la luz de dicha norma, que pueda actuar un apoderado sustituto sin necesidad de sustitución del poder. Es claro a este respecto lo dispuesto por la citada norma al establecer que: "Si en el poder se mencionan varios (apoderados), se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden".

En el caso que se examina es claro, también, que quien figura como apoderado principal por ser el primero de un listado es el doctor Alvaro Correa Ordoñez (ver documento de poder a folio 50 y siguientes del expediente). Así las cosas, en seguimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien actúe como apoderado y no sea el principal debe actuar facultado por una sustitución que provenga de dicho primer apoderado. Entonces, figurando el doctor Carlos R. Olarte como apoderado sustituto, segundo en el orden establecido por el poderdante, ha debido operarse la sustitución por parte del doctor Alvaro Correa Ordoñez, apoderado principal, lo que en efecto no se hizo.

Valga en este punto traer a cuento la disposición del artículo 27 del código civil según la cual: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu..."

Por lo anterior, no se acepta la argumentación del recurrente en punto a poner en duda que exista la necesidad de darse la sustitución a favor de quien buscaba actuar como apoderado en el trámite administrativo en cuestión.

No desconoce esta Oficina que pueda darse con el entendimiento de la norma en cuestión un nuevo enfoque a una posición asumida con anterioridad lo que no quiere decir que se esté intentando ahora o antes desconocer una disposición legal pues lo que se busca en todo caso es dar estricta aplicación al ordenamiento jurídico correspondiente.

Con referencia a la aplicación de los principios legales y constitucionales que enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido política de esta entidad dar en todo cumplimiento a tales principios, claro está sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son consideradas por la misma ley como de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe ha manifestado la Corte Constitucional: "Este, en efecto, no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman –juris tantum- que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtúar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes (art. 6° C.N) Sentencia T-381 de 14 de septiembre de 1993.

RESOLUCIÓN 3037

Por la cual se resuelve un recurso

Ahora bien, cosa distinta es que ante la carencia del correspondiente escrito de sustitución, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad, ha debido la Administración hacer el requerimiento en tal sentido en aras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el abandono de la solicitud.

Así las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solicitud la actuación que correspondía era el requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que señala la ley, lo que ciertamente no se hizo.

Encuentra, entonces este Despacho que no se actuó conforme a dicha disposición para así evitar una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se agrega a lo anterior que con el escrito de recurso se presentó memorial de sustitución con la correspondiente ratificación de lo actuado por parte del doctor Carlos R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia razón jurídica válida para acceder a la revocatoria planteada y ordenar la consecuente continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 27349 de 2000 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de esta resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado sustituto del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 ENE. 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 35 Nº 7 - 25, piso 4
Bogotá D. C.

SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

125 f 26

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 3034 11 ABR 2001

Por la cual se resuelve un recurso 28 ABR 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

PROCESADO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 27345 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó archivar la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2001 bajo el número 99027207 00000005, el doctor Carlos R. Olarte, interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque la mencionada resolución y en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención de la referencia, y se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Carlos R. Olarte, luego de transcribir el artículo 66 del código de procedimiento civil , que dicha norma tiene "dos propósitos aparentes: primero, la ley desea que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, en principio para consolidar en un solo abogado las obligaciones y derechos de la parte representada; y segundo, en el caso que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, la ley establece un orden jerárquico entre los abogados listados. Sin embargo, no resulta claro si, para que actúe de manera inicial uno de los sustitutos sin que obre el apoderado principal, se requiera que el principal expida una sustitución expresa, como lo exige el Despacho en la resolución impugnada. El mismo artículo 66 parece establecer lo contrario, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos, razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más cuando el apoderado principal no ha obrado en el trámite administrativo. Es decir, el artículo 66 parece permitir una sustitución implícita, al menos cuando actúa por primera vez uno de los apoderados sustitutos, entendiéndose que el principal siempre podría reasumir el poder. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto resulta claro que éste concedía facultades a cualesquiera de los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo sugiere razonablemente el membrete), sin importar su orden."

Señala por otra parte, que "La posición esbozada por el Despacho en la resolución impugnada se aparta de manera inesperada de aquella establecida en casos anteriores, donde con los mismos hechos –e incluso con el mismo solicitante- consideraba que no era necesario aportar la sustitución ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave inseguridad jurídica, en tanto una modificación tan radical en la práctica reiterada del Despacho, sin previo aviso, no puede sino causar trauma entre los administrados, quienes antes de una fecha creen que están cumpliendo con los criterios del Despacho, y de un momento para otro se les cambia sorprendentemente las reglas del juego. Para ilustración del Despacho, me permito aportar dos casos como ejemplos donde el Examinador Jurídico aceptó el Documento de Poder a nombre de Pfizer Products

Inc. como válido sin requerir en ningún momento la sustitución que ahora constituye el único motivo de abandono para esta solicitud. En el expediente No 99.077.825 se allegó el poder el día de la presentación de la solicitud, y en el primer auto de forma el Examinador Jurídico no hizo comentario alguno sobre el poder allegado. En el segundo caso, ventilado dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Jurídico, aparentemente a pesar de revisar el poder allegado –objetándolo en cuanto a la traducción-, no requirió la presentación de una sustitución."

Señala por otra parte que la actuación del Despacho resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 83 y 209 de la Constitución política, artículos que en su opinión deben "ser tenidos como el marco de referencia de acción de la Administración Pública, en este caso, de la SIC al acometer los procesos de estudio y aprobación de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administración a comportarse de tal forma que respete la presunción de buena fe del solicitante y adicionalmente a observar un trámite eficaz. Tenido en cuenta lo anterior, el Despacho pudo perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para sanear el requisito formal presuntamente incompleto. Por el contrario, habiendo podido tomar esta vía, menos onerosa y más eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, el Despacho en cambio se apresuró a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi apoderada."

Anota también que "la SIC vulneró con la conducta descrita en el numeral anterior, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2, 3 y 12 del Código Contencioso Administrativo...Las anteriores normas, en desarrollo del artículo 209 y 83 de la Constitución Nacional, claramente obligan a la Administración a remover los obstáculos puramente formales –como la ausencia del documento de sustitución- para hacer efectivos los derechos de los administrados, evitando decisiones inhibitorias como la contenida en la resolución impugnada. Aceptando una vez más en gracia de discusión que la sustitución era un documento sin el cual no se podía decidir, en aras de preservar el principio constitucional de eficacia desarrollado en estas normas administrativas, bastaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, o como un requerimiento contenido en un examen de fondo de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 344 (o el artículo 45 de la nueva Decisión 486), se le hubiera dado la oportunidad al suscrito para que ratificara la actuación adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requerimiento de la sustitución."

Finaliza su argumentación señalando que, "Es interesante acudir también al artículo 4 del C.P.C., que se refiere a la interpretación de las normas procesales: 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...' Este artículo desarrolla el mandato del artículo 228 de la Constitución, texto que igualmente respeta la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y que tuvo como fundamento evitar las sentencias inhibitorias, en abstracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencia del descuido en el saneamiento de las formas. La Corte Constitucional arroja un norte importante sobre la diferencia entre formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228: 'Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales... sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanin Griffenstein)' Es decir, ciertamente existen formalidades que deben cumplirse –como lo puede ser el aporte de una sustitución en este caso-, pero lo que advierte la Corte es que, en el evento de su ausencia, el fallador debe buscar su saneamiento y evitar que dicha ausencia sea el motivo de la declaración de abandono de un

trámite. El propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentra precisamente el de evitar nulidades y providencias inhibitorias (Art. 37, ordinal 4). En este caso, como lo he manifestado anteriormente, el Despacho tiene las herramientas procesales para haber solicitado formalmente el saneamiento de una formalidad que se consideró no cumplida...Finalmente, valga la pena señalar que adjunto una sustitución del Dr. Alvaro Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica la actuación del suscrito hasta la fecha. Espero igualmente que el Despacho considere que con este documento se esté dando cumplimiento con la formalidad exigida en la resolución impugnada".

ARTICULO TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 344 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria aplicable al caso en estudio por ser la vigente al momento de expedirse el acto administrativo que se impugna, establece que: "Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud".

Conforme lo dispone el artículo 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros." Por su parte, el artículo 4 del Decreto 117 de 1994 señala, con referencia al citado artículo 14, como "Requisitos adicionales de la solicitud...g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria".

Por su parte en el artículo 66 del código de procedimiento civil se establece que: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden ...

" La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal podrá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito...."

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con derivados de 2-desoxihidromicina.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mencionándose desde un comienzo como apoderado de la sociedad solicitante, Pfizer Products Inc., al doctor Carlos R. Olarte, no se allega poder que lo faculte para actuar, ni acreditación de la existencia y representación de dicha solicitante,

por lo anterior y en seguimiento del trámite administrativo se efectuó requerimiento en el mismo sentido, es decir para que acreditara personería para actuar. En este caso hubo además observaciones de carácter técnico formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestación del recurrente según la cual la disposición del artículo 66 tiene como propósito determinar que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, comparte esta Oficina la apreciación del recurrente, como también que la ley permite que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados. No obstante, no comparte la posición del doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, a la luz de dicha norma, que pueda actuar un apoderado sustituto sin necesidad de sustitución del poder. Es claro a este respecto lo dispuesto por la citada norma al establecer que: "Si en el poder se mencionan varios (apoderados), se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden".

En el caso que se examina es claro, también, que quien figura como apoderado principal por ser el primero de un listado es el doctor Alvaro Correa Ordoñez (ver documento de poder a folio 50 y siguientes del expediente). Así las cosas, en seguimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien actúe como apoderado y no sea el principal debe actuar facultado por una sustitución que provenga de dicho primer apoderado. Entonces, figurando el doctor Carlos R. Olarte como apoderado sustituto, segundo en el orden establecido por el poderdante, ha debido operarse la sustitución por parte del doctor Alvaro Correa Ordoñez, apoderado principal, lo que en efecto no se hizo.

Valga en este punto traer a cuento la disposición del artículo 27 del código civil según la cual: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu..."

Por lo anterior, no se acepta la argumentación del recurrente en punto a poner en duda que exista la necesidad de darse la sustitución a favor de quien buscaba actuar como apoderado en el trámite administrativo en cuestión.

No desconoce esta Oficina que pueda darse con el entendimiento de la norma en cuestión un nuevo enfoque a una posición asumida con anterioridad lo que no quiere decir que se esté intentando ahora o antes desconocer una disposición legal pues lo que se busca en todo caso es dar estricta aplicación al ordenamiento jurídico correspondiente.

Con referencia a la aplicación de los principios legales y constitucionales que enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido política de esta entidad dar en todo cumplimiento a tales principios, claro está sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son consideradas por la misma ley como de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe ha manifestado la Corte Constitucional: "Este, en efecto, no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman –juris tantum- que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes (art. 6° C.N) Sentencia T-381 de 14 de septiembre de 1993.

RESOLUCIÓN 3034

Por la cual se resuelve un recurso

Ahora bien, cosa distinta es que ante la carencia del correspondiente escrito de sustitución, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad, ha debido la Administración hacer el requerimiento en tal sentido en aras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el abandono de la solicitud.

Así las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solicitud la actuación que correspondía era el requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que señala la ley, lo que ciertamente no se hizo.

Encuentra, entonces este Despacho que no se actuó conforme a dicha disposición para así evitar una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se agrega a lo anterior que con el escrito de recurso se presentó memorial de sustitución con la correspondiente ratificación de lo actuado por parte del doctor Carlos R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia razón jurídica válida para acceder a la revocatoria planteada y ordenar la consecuente continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 27345 de 2000 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de esta resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado sustituto del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 DIC. 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 35 Nº 7 - 25, piso 4
Bogotá D. C.

SIC DE INDUSTRIA Y COMERCIO

424
130

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 3041 11 ABR 2001

Por la cual se resuelve un recurso

26 ABR 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

PROCESADO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 27343 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó archivar la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2001 bajo el número 99027208 00000005, el doctor Carlos R. Olarte, interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque la mencionada resolución y en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención de la referencia, y se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Carlos R. Olarte, luego de transcribir el artículo 66 del código de procedimiento civil , que la norma tiene "dos propósitos aparentes: primero, la ley desea que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, en principio para consolidar en un solo abogado las obligaciones y derechos de la parte representada; y segundo, en el caso que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, la ley establece un orden jerárquico entre los abogados listados. Sin embargo, no resulta claro si, para que actúe de manera inicial uno de los sustitutos sin que obre el apoderado principal, se requiera que el principal expida una sustitución expresa, como lo exige el Despacho en la resolución impugnada. El mismo artículo 66 parece establecer lo contrario, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos, razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más cuando el apoderado principal no ha obrado en el trámite administrativo. Es decir, el artículo 66 parece permitir una sustitución implícita, al menos cuando actúa por primera vez uno de los apoderados sustitutos, entendiéndose que el principal siempre podría reasumir el poder. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto resulta claro que éste concedía facultades a cualesquiera de los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo sugiere razonablemente el membrete), sin importar su orden."

Señala por otra parte, que "La posición esbozada por el Despacho en la resolución impugnada se aparta de manera inesperada de aquella establecida en casos anteriores, donde con los mismos hechos –e incluso con el mismo solicitante- consideraba que no era necesario aportar la sustitución ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave inseguridad jurídica, en tanto una modificación tan radical en la práctica reiterada del Despacho, sin previo aviso, no puede sino causar trauma entre los administrados, quienes antes de una fecha creen que están cumpliendo con los criterios del Despacho, y de un momento para otro se les cambia sorprendentemente las reglas del juego. Para ilustración del Despacho, me permito aportar dos casos como ejemplos donde el Examinador Jurídico aceptó el Documento de Poder a nombre de Pfizer Products

Inc. como válido sin requerir en ningún momento la sustitución que ahora constituye el único motivo de abandono para esta solicitud. En el expediente No 99.077.825 se allegó el poder el día de la presentación de la solicitud, y en el primer auto de forma el Examinador Jurídico no hizo comentario alguno sobre el poder allegado. En el segundo caso, ventilado dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Jurídico, aparentemente a pesar de revisar el poder allegado –objetándolo en cuanto a la traducción-, no requirió la presentación de una sustitución."

Señala por otra parte que la actuación del Despacho resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 83 y 209 de la Constitución política, artículos que en su opinión deben "ser tenidos como el marco de referencia de acción de la Administración Pública, en este caso, de la SIC al acometer los procesos de estudio y aprobación de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administración a comportarse de tal forma que respete la presunción de buena fe del solicitante y adicionalmente a observar un trámite eficaz. Tenido en cuenta lo anterior, el Despacho pudo perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para sanear el requisito formal presuntamente incompleto. Por el contrario, habiendo podido tomar esta vía, menos onerosa y más eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, el Despacho en cambio se apresuró a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi apoderada."

Anota también que "la SIC vulneró con la conducta descrita en el numeral anterior, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2, 3 y 12 del Código Contencioso Administrativo...Las anteriores normas, en desarrollo del artículo 209 y 83 de la Constitución Nacional, claramente obligan a la Administración a remover los obstáculos puramente formales –como la ausencia del documento de sustitución- para hacer efectivos los derechos de los administrados, evitando decisiones inhibitorias como la contenida en la resolución impugnada. Aceptando una vez más en gracia de discusión que la sustitución era un documento sin el cual no se podía decidir, en aras de preservar el principio constitucional de eficacia desarrollado en estas normas administrativas, bastaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, o como un requerimiento contenido en un examen de fondo de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 344 (o el artículo 45 de la nueva Decisión 486), se le hubiera dado la oportunidad al suscrito para que ratificara la actuación adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requerimiento de la sustitución."

Finaliza su argumentación señalando que, "Es interesante acudir también al artículo 4 del C.P.C., que se refiere a la interpretación de las normas procesales: 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...' Este artículo desarrolla el mandato del artículo 228 de la Constitución, texto que igualmente respeta la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y que tuvo como fundamento evitar las sentencias inhibitorias, en abstracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencia del descuido en el saneamiento de las formas. La Corte Constitucional arroja un norte importante sobre la diferencia entre formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228: 'Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales... sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanin Griffenstein)' Es decir, ciertamente existen formalidades que deben cumplirse –como lo puede ser el aporte de una sustitución en este caso-, pero lo que advierte la Corte es que, en el evento de su ausencia, el fallador debe buscar su saneamiento y evitar que dicha ausencia sea el motivo de la declaración de abandono de un

trámite. El propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentra precisamente el de evitar nulidades y providencias inhibitorias (Art. 37, ordinal 4). En este caso, como lo he manifestado anteriormente, el Despacho tiene las herramientas procesales para haber solicitado formalmente el saneamiento de una formalidad que se consideró no cumplida...Finalmente, valga la pena señalar que adjunto una sustitución del Dr. Alvaro Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica la actuación del suscrito hasta la fecha. Espero igualmente que el Despacho considere que con este documento se esté dando cumplimiento con la formalidad exigida en la resolución impugnada".

ARTICULO TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 344 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria aplicable al caso en estudio por ser la vigente al momento de expedirse el acto administrativo que se impugna, establece que: "Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud".

Conforme lo dispone el artículo 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros." Por su parte, el artículo 4 del Decreto 117 de 1994 señala, con referencia al citado artículo 14, como "Requisitos adicionales de la solicitud...g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria".

Por su parte en el artículo 66 del código de procedimiento civil se establece que: "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden ...

"La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal podrá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito...."

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con derivados de higromicina A.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mencionándose desde un comienzo como apoderado de la sociedad solicitante, Pfizer Products Inc., al doctor Carlos R. Olarte, no se allega poder que lo faculte para actuar, ni acreditación de la existencia y representación de dicha solicitante,

por lo anterior y en seguimiento del trámite administrativo se efectuó requerimiento en el mismo sentido, es decir para que acreditara personería para actuar. En este caso hubo además observaciones de carácter técnico formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestación del recurrente según la cual la disposición del artículo 66 tiene como propósito determinar que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, comparte esta Oficina la apreciación del recurrente, como también que la ley permite que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados. No obstante, no comparte la posición del doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, a la luz de dicha norma, que pueda actuar un apoderado sustituto sin necesidad de sustitución del poder. Es claro a este respecto lo dispuesto por la citada norma al establecer que: "Si en el poder se mencionan varios (apoderados), se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden".

En el caso que se examina es claro, también, que quien figura como apoderado principal por ser el primero de un listado es el doctor Alvaro Correa Ordoñez (ver documento de poder a folio 50 y siguientes del expediente). Así las cosas, en seguimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien actúe como apoderado y no sea el principal debe actuar facultado por una sustitución que provenga de dicho primer apoderado. Entonces, figurando el doctor Carlos R. Olarte como apoderado sustituto, segundo en el orden establecido por el poderdante, ha debido operarse la sustitución por parte del doctor Alvaro Correa Ordoñez, apoderado principal, lo que en efecto no se hizo.

Valga en este punto traer a cuento la disposición del artículo 27 del código civil según la cual: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consulta su espíritu..."

Por lo anterior, no se acepta la argumentación del recurrente en punto a poner en duda que exista la necesidad de darse la sustitución a favor de quien buscaba actuar como apoderado en el trámite administrativo en cuestión.

No desconoce esta Oficina que pueda darse con el entendimiento de la norma en cuestión un nuevo enfoque a una posición asumida con anterioridad lo que no quiere decir que se esté intentando ahora o antes desconocer una disposición legal pues lo que se busca en todo caso es dar estricta aplicación al ordenamiento jurídico correspondiente.

Con referencia a la aplicación de los principios legales y constitucionales que enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido política de esta entidad dar en todo cumplimiento a tales principios, claro está sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son consideradas por la misma ley como de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe ha manifestado la Corte Constitucional: "Este, en efecto, no consiste en que el Estado deba someterse sin análisis ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman –juris tantum- que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes (art. 6° C.N) Sentencia T-381 de 14 de septiembre de 1993.

Ahora bien, cosa distinta es que ante la carencia del correspondiente escrito de sustitución, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad, ha debido la Administración hacer el requerimiento en tal sentido en aras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el abandono de la solicitud.

Así las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solicitud la actuación que correspondía era el requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que señala la ley, lo que ciertamente no se hizo.

Encuentra, entonces este Despacho que no se actuó conforme a dicha disposición para así evitar una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se agrega a lo anterior que con el escrito de recurso se presentó memorial de sustitución con la correspondiente ratificación de lo actuado por parte del doctor Carlos R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia razón jurídica válida para acceder a la revocatoria planteada y ordenar la consecuente continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 27343 de 2000 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de esta resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado sustituto del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 ENE. 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 35 No 7 - 25, piso 4
Bogotá D. C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

135

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 3643 DE 27 ABR 2001

Por la cual se resuelve un recurso

26 ABR 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confieren en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

CONSIDERANDO

PROCESADO

PRIMERO: Mediante resolución 27333 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó archivar la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2001 bajo el número 00000034 00000034, el doctor Carlos R. Olarte, interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución y en consecuencia del recurso, los que se revoque la mencionada resolución y en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención de la referencia, y se fundamenta de la siguiente manera.

Manifiesta el doctor Carlos R. Olarte, luego de transcribir el artículo 66 del código de procedimiento civil, que el mismo tiene "dos propósitos aparentes: primero, la de dejar claro que solamente debe existir un representante actuando en cualquier momento durante el proceso con el propósito para consolidar en un solo abogado las obligaciones y derechos de la parte representada, y segundo, en el caso que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, la ley establece un orden jerárquico entre los abogados listados. Sin embargo, no resulta claro si, para que actúe de manera válida uno de los sustitutos sin que obre el apoderado principal, se requiera que el principal expida una sustitución expresa, como lo exige el Despacho en la resolución impugnada. El mismo artículo 66 parece establecer lo contrario, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos, razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más cuando el apoderado principal no ha obrado en el trámite administrativo. En efecto, el artículo 66 pareciera permitir una sustitución implícita, al menos cuando actúa por primera vez uno de los apoderados sustitutos, entendiéndose que el principal siempre podría reasumir el poder. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto resulta claro que éste concedía facultades a cualesquiera de los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo supone razonablemente el membrete), sin importar su orden."

Señala por otra parte, que "La posición esbozada por el Despacho en la resolución impugnada se aparta de manera inesperada de aquella establecida en casos anteriores, donde con los mismos hechos –e incluso con el mismo solicitante- consideraba que no era necesario aportar la sustitución ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave inseguridad jurídica, en tanto una modificación tan radical en la práctica reiterada del Despacho, sin previo aviso, no puede sino causar trauma entre los administrados, quienes antes de una fecha creen que están cumpliendo con los criterios del Despacho, y de un momento para otro se les cambia sorprendentemente las reglas del juego. Para ilustración del Despacho, me permito aportar dos casos como ejemplos donde el Examinador Jurídico aceptó el Documento de Poder a nombre de Pfizer Products

Carrera 13 N° 27-00 Pisos 5° y 10°
Conmutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125
Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

[illegible] como válido sin requerir en ningún momento [illegible] que ahora constituye el único motivo de abandono para esta solicitud. En el expediente No 91[illegible]92 se allegó el poder el día de la presentación de la solicitud, y en el primer acto de forma el Examinador Jurídico no hizo comentario alguno sobre el poder allegado. En el segundo caso, verificado dentro del expediente No 99 093[illegible]49, el Examinador Jurídico, aparentemente a pesar de revisar el poder allegado [illegible] en cuanto a la traducción, no requirió la presentación de una sustitución."

Señala por otra parte que la actuación del Despacho es contraria a lo dispuesto por los artículos 83 y 209 de la Constitución política, artículos que en su opinión deben "ser tenidos como el marco de referencia de acción de la Administración Pública, en este caso, de la SIC al adelantar los procesos de estudio y aprobación de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administración a comportarse de tal forma que respete la presunción de buena fe del solicitante y adicionalmente [illegible] a observar un trámite eficaz. Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho pudo perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para sanear el requisito formal presuntamente incompleto [illegible] contrario, habiendo podido tomar esta vía menos onerosa y más eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, el Despacho en cambio se apresuró a declarar abandonada la solicitud, con la consecuencia del todo los derechos de mi apoderdata."

Anota también que la SIC vulneró con la conducta descrita en el numeral anterior, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2, 3 y 12 del Código Contencioso Administrativo. Las anteriores normas, en desarrollo del artículo 209 y 83 de la Constitución Nacional, claramente obligan a la Administración a remover los obstáculos puramente formales –como la ausencia del documento de sustitución– para hacer efectivos los derechos de los administrados, evitando decisiones inhibitorias como la contenida en la resolución impugnada. Aceptando una vez más en gracia de discusión que la sustitución era un documento sin el cual no se podía decidir, en aras de preservar el principio constitucional de [illegible] desarrollado en estas normas administrativas, bastaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, o como un requerimiento contenido en un examen de fondo de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 344 (o el artículo 40 de la nueva Decisión 486), se le hubiera dado la oportunidad al solicitante para que ratificara la actuación adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requerimiento de la sustitución."

Finaliza su argumentación señalando que, "Es interesante recordar también el artículo 4 del C.P.C., que se refiere a la interpretación de las normas procesales: 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.' Este artículo desarrolla el mandato del artículo 228 de la Constitución, texto que igualmente respeta la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y que tiene como fundamento evitar las sentencias inhibitorias, en abstracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencia del descuido en el saneamiento de las formas. La Corte Constitucional arroja un norte importante sobre la diferencia entre formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228: 'Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales... sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein)' Es decir, ciertamente existen formalidades que deben cumplirse –como lo puede ser el aporte de una sustitución en este caso–, pero lo que advierte la Corte es que, en el evento de su ausencia, el fallador debe buscar su saneamiento y evitar que dicha ausencia sea el motivo de la declaración de abandono de un trámite. El propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentra precisamente el de evitar

nulidades y providencias inhibitorias (Art. 37, ordinal 4). En este caso, como lo he manifestado anteriormente, el Despacho tiene las herramientas procesales para haber solicitado formalmente el saneamiento de una formalidad que se consideró no cumplida. Finalmente, valga la pena señalar que adjunto una sustitución del Dr. Alvaro Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica la actuación del escrito hasta la fecha. Espero igualmente que el Despacho considere que con este documento se está dando cumplimiento con la formalidad exigida en la resolución impugnada".

ARTICULO TERCERO: Para atender lo señalado en el Artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 344 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria aplicable al caso en estudio por ser la vigente al momento de expedirse el acto administrativo que se impugna, establece que "Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud"

Conforme lo dispone el artículo 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros." Por su parte, el artículo 4 del Decreto 117 de 1994 señala, con referencia al citado artículo 14, como "Requisitos adicionales de la solicitud...g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria".

Por su parte en el artículo 66 del código de procedimiento civil se establece que "En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden ...

"La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal podrá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito. ..."

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con compuestos inhibidores no peptidílicos.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mencionándose desde un comienzo como apoderado de la sociedad solicitante, Pfizer Products Inc., al doctor Carlos R. Olarte, no se allega poder que lo faculte para actuar, ni acreditación de la existencia y representación de dicha solicitante,

por lo anterior y en seguimiento del tramite administrativo se efectuó requerimiento en el mismo sentido, es decir para que acreditara personería para actuar. En este caso hubo además observaciones de carácter técnico formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestación del recurrente acerca la cual la disposición del artículo 66 tiene como propósito determinar que solamente exista un representante actuando en cualquier momento durante el proceso, comparte esta Oficina la apreciación del recurrente, cómo también que la ley permite que el poderdante otorgue facultades de representación a varios apoderados. No obstante, no comparte la posición del doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, a la luz de la norma, que pueda actuar un apoderado sustituto sin necesidad de sustitución del poder. Es claro a este respecto lo dispuesto por la citada norma al establecer que: "Si en el poder se mencionan varios (apoderados), se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden".

En el caso que se examina es claro, también, que quien figura como apoderado principal por ser el primero de un listado es el doctor Alvaro Correa Ordoñez (ver documento de poder a folio 50 y siguientes del expediente). Así las cosas, en seguimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien actue como apoderado y no sea el principal debe actuar facultado por una sustitución que provenga de dicho poder apoderado. Entonces, figurando el doctor Carlos R. Olarte como apoderado sustituto, segundo en el orden establecido por el poderdante, ha debido operarse la sustitución por parte del doctor Alvaro Correa Ordoñez, apoderado principal, lo que en efecto no se hizo.

Valga en este punto traer a cuento la disposición del artículo 27 del código civil, según la cual, "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu..."

Por lo anterior, no se acepta la argumentación del recurrente en punto a poner en duda que existía la necesidad de darse la sustitución a favor de quien buscaba actuar como apoderado en el tramite administrativo en cuestión.

No desconoce esta Oficina qué pueda darse con el entendimiento de la norma en cuestión un nuevo enfoque a una posición asumida con anterioridad lo que no quiere decir que se esté entendiendo ahora o antes desconocer una disposición legal pues lo que se busca en todo caso es dar estricta aplicación al ordenamiento jurídico correspondiente.

Con referencia a la aplicación de los principios legales y constitucionales que enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido política de esta entidad dar en todo cumplimiento a tales principios, claro esta sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son consideradas por la misma ley como de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe ha manifestado la Corte Constitucional: "Este, en efecto, no consiste en que el Estado deba someterse sin cautelas ni posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman ajuste tantum que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes (art. 6° C.N)" Sentencia T-301 de 14 de septiembre de 1993.

RESOLUCIÓN 3443

Por la cual se resuelve un recurso

139

Ahora bien, cosa distinta es que ante la carencia del correspondiente escrito de sustitución, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad, ha debido la Administración hacer el requerimiento en tal sentido con miras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el abandono de la solicitud.

Así las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solicitud la actuación que correspondía era el requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que señala la ley, lo que ciertamente no se hizo.

Encuentra, entonces este Despacho que no se actuó conforme a dicha disposición para así evitar una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se agrega a lo anterior que con el escrito de recurso se presentó memorial de sustitución con la correspondiente ratificación de lo actuado por parte del doctor Carlos R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia razones suficientes válidas para acceder a la revocatoria planteada y ordenar la consecuente continuación del trámite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 27330 de 2000 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de esta resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado sustituto del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 31 ENE. 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 35 No 7 - 25, piso 4
Bogotá D. C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

11 ABR 2001

26 ABR 2001

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 3035

Por la cual se resuelve un recurso

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confieren en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo, y

PROCESADO

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolución 27347 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó archivar la solicitud contenida en esa actuación.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de enero de 2001 bajo el numero 99174438 00000, el doctor Carlos R. Olarte, interpuso, dentro de los términos de ley, recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución. El objeto del recurso es que se revoque la mencionada resolución y en su lugar se continúe con el trámite de concesión final de patente de invención de la referencia y se fundamenta de la siguiente manera:

Manifiesta el doctor Carlos R. Olarte, luego de transcribir el artículo 66 del código de procedimiento civil, que el mismo tiene "dos propósitos aparentes, primero la ley desea que solamente exista un representante, actuando en cualquier momento durante el proceso. Un ejemplo para consolidar en un solo abogado las obligaciones y derechos de la parte representada y después, en el caso que el poderdante otorgue facultades de representación a varios abogados, la ley establece un orden jerárquico entre los abogados listados. Sin embargo, no resulta claro si, para que actúe de manera válida uno de los sustitutos sin que obre el apoderado principal, se requiera que el principal expida una sustitución expresa, como lo exige el Despacho en la resolución impugnada. El mismo artículo 66 parece establecer lo contrario, pues expresamente reconoce que los demás abogados listados en efecto ya gozan de una condición de apoderados sustitutos, razón por la cual no existe necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situación, aún más cuando el apoderado principal no ha obrado en el trámite administrativo. En efecto, el artículo 66 parece permitir una sustitución implícita, al menos cuando actúa por primera vez uno de los apoderados sustituidos, entendiéndose que el principal siempre podría reasumir el poder. Esta conclusión también se encuentra respaldada por la intención del solicitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concreto resulta claro que éste concedía facultades a cualesquiera de los abogados nombrados (todos miembros de la misma firma como lo sugiere razonablemente el membrete), sin importar su orden."

Señala por otra parte, que "La posición esbozada por el Despacho en la resolución impugnada se aparta de manera inesperada de aquella establecida en casos anteriores, donde con los mismos hechos consideraba que no era necesario aportar la sustitución ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave inseguridad jurídica, en tanto una modificación tan radical en la práctica reiterada del Despacho, sin previo aviso, no puede sino causar trauma entre los administrados, quienes antes de una fecha creen que están cumpliendo con los criterios del Despacho, y de un momento para otro se les cambia sorpresivamente las reglas del juego. Para ilustración del Despacho, nos permitimos aportar dos casos como ejemplos donde el Examinador Jurídico aceptó el Documento de Poder (Consorcio de Pfizer Products Inc. como válido sin requerir

Carrera 13 N° 27-00 Pisos 5° y 10°
Conmutador 334 1221-2-3-4
Fax 281 3125
Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

en ningún momento la sustitución que ahora constituye el fin o motivo de abandono para esta solicitud. En el expediente No 99.077.825 se allegó el poder el día de la presentación de la solicitud, y en el primer auto de forma el Examinador Jurídico no hizo comentario alguno sobre el poder allegado. En el segundo caso, ventilado dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Jurídico, aparentemente a pesar de revisar el poder allegado –objetándolo en cuanto a la traducción– no requirió la presentación de una sustitución."

Indica por otra parte que la actuación del Despacho se ajusta a lo dispuesto por los artículos 83 y 209 de la Constitución política, artículos que en su opinión deben "ser tenidos como el marco de referencia de actuación de la Administración Pública, en este caso, de la SIC al acometer los procesos de estudio y aprobación de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administración a comportarse de tal forma que respete la presunción de buena fe del solicitante y adicionalmente a observar un trámite eficaz. Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho pudo perfectamente optar por solicitar el correspondiente documento de sustitución para suplir el requisito formal pero ciertamente incumplido. Por lo contrario, habiendo podido tomar esta vía, menos onerosa y más eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesal, el despacho en cambio se apresuró a declarar abandonada la solicitud sin salvaguardia del todo los derechos de mi apoderado."

Afirma también que "la SIC vulneró con la conducta descrita en el numeral anterior, el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2, 3 y 12 del Código Contencioso Administrativo. Las anteriores normas, en desarrollo del artículo 209 y 83 de la Constitución Nacional, claramente obligan a la Administración a remover los obstáculos puramente formales –como la ausencia del documento de sustitución– para hacer efectivos los derechos de los administrados, evitando decisiones inhibitorias como la contenida en la resolución impugnada. Aceptando una vez más en gracia de discusión que la sustitución era un documento sin el cual no se podía decidir, en aras de preservar el principio constitucional de eficacia desarrollado en estas normas administrativas, bastaba que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso administrativo, o como un requerimiento contenido en un examen de fondo de la solicitud al artículo 27 de la Decisión 344 (o el artículo 45 de la nueva Decisión 486), se le hubiera dado la oportunidad al poscito para que ratificara la actuación adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requerimiento de la sustitución."

Finaliza su argumentación señalando que, "Es interesante recalar también el artículo 4 del C.P.C., que se refiere a la interpretación de las normas procesales. 'Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.' Este artículo desarrolla el mandato del artículo 228 de la Constitución, texto que igualmente respeta la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, y que tiene como fundamento evitar las sentencias inhibitorias, en abstracto o las terminaciones de procesos con cosa juzgada, como consecuencia del descuido en el saneamiento de las formas. La Corte Constitucional arroja un norte importante sobre la diferencia entre formalidades y el excesivo formalismo al interpretar el artículo 228: 'Como se puede apreciar la intención del constituyente no fue la de eliminar los preceptos legales que establecen formalidades o requerimientos en el trámite de los procesos judiciales... sino abolir el excesivo rigorismo formal, es decir, la exigencia de múltiples condicionamientos de forma que en nada tocan con el fondo del asunto sometido a juicio, o con el derecho en sí mismo considerado, y que su omisión no impide que el fallador profiera decisión definiendo a quien corresponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentencia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanín Greffenstein)' Es decir, ciertamente existen formalidades que deben cumplirse –como lo puede ser el aporte de una sustitución en este caso–, pero lo que advierte la Corte es que, en el evento de su ausencia, el fallador debe buscar su saneamiento y evitar que dicha ausencia sea el motivo de la declaración de abandono de un trámite. El propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentre precisamente el de evitar

[illegible]

[illegible] solicitudes y providencias anteriores [illegible] como se ha manifestado anteriormente el Despacho tiene las herramientas procesales para haber corregido oportunamente el saneamiento de esa formalidad que se considera no cumplida. Finalmente, [illegible] me permito señalar que adjunto una sustitución del Dr. Eduardo Correa-Ordoñez, primer abogado listado en el [illegible] de poder anteriormente aportado en este trámite, quien adicionalmente ratifica [illegible] Pasaje la fecha. Espero igualmente que el Despacho no considere que con este [illegible] se [illegible] cumplimiento con la formalidad exigida en la decisión aquí impugnada"

ARTICULO TERCERO: Para atender lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido propuestas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Decisión 344 expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria aplicable al caso concreto, por ser la vigente al momento de expedirse el acto administrativo que se impugna, establece que "Si la oficina nacional competente encuentra que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario pueda dar una debida respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, a solicitud del interesado. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud"

Conforme lo dispone el artículo 14 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Para solicitar deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios, en los debidos requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros". Por su parte el artículo 4 del Decreto 117 de 1994 señala, con referencia al citado artículo 14, como "Requisitos adicionales de la solicitud...g) Los documentos que acrediten la [illegible] representación legal de la persona jurídica peticionaria".

Por su parte en el artículo 66 del código de procedimiento civil se establece que "En ningún proceso podrán actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona, si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden ...

La sustitución a distinto abogado sólo podrá hacerla el apoderado principal, cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder; circunstancias que el principal podrá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito"

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con tapones para botellas o recipientes conteniendo líquidos tales como bebidas alcohólicas.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mencionándose desde un comienzo como apoderado de la sociedad solicitante "Nuevo Productos Inc.", a don Carlos R. Obando no se allegó poder que le facultara para actuar en actuaciones de [illegible] representación de dicha sociedad

143

por lo anterior y en seguimiento del trámite administrativo [illegible] efectúa requerimiento en el mismo sentido en el cual se dio para que acreditara personería para actuar. En ese caso hubo además observaciones de carácter técnico formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestación del recurrente [illegible] la disposición del artículo 66 tiene como propósito determinar que solamente [illegible] cualquier momento durante el proceso, comparte esta Oficina la apreciación del [illegible] como también que la ley permite que el poderdante otorgue facultades de [illegible] expresadas [illegible] constante, no obstante la posición del doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, a la luz de [illegible] que pueda actuar un apoderado sustituto sin necesidad de sustitución del poder. Es claro a este [illegible] lo dispuesto por la citada norma al establecer que: "Si en el poder se mencionan varios (apoderados) [illegible] citada ley como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden".

En el caso que se examina es claro también que [illegible] como apoderado principal por ser el primero de los [illegible] es el doctor Alvaro Correa Ordoñez [illegible] documento de poder a folio 50 y siguientes del expediente). Así las cosas, en seguimiento de dicha norma para establecer quién puede actuar como apoderado y no sea el principal debe actuar [illegible] esta situación que provenga de dicho primer apoderado. Entonces, siguiendo al doctor Ordoñez [illegible] como apoderado sustituto, segundo en el orden establecido por el poderdante, ha debido operarse la [illegible] por parte del doctor Alvaro Correa Ordoñez apoderado principal, lo que en efecto no se hizo.

Vuelve en este punto traer a cuento la disposición del artículo 27 del código civil según la cual: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su [illegible] pretexto de consultar su espíritu..."

Por lo anterior, no se acepta la argumentación del [illegible] en el sentido que exista la necesidad de darse la sustitución a favor de quien buscaba [illegible] como apoderado en el tramite administrativo en cuestión.

No desconoce esta Oficina que pueda darse otro entendimiento de la norma en cuestión y revisar una posición asumida con anterioridad lo que no quiere decir que se [illegible] desconocer una disposición legal puesto que se busca en todo caso es dar estricta aplicación al ordenamiento jurídico correspondiente.

Con referencia a la aplicación de los principios [illegible] constitucionales que enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido política de esta entidad [illegible] en todo cumplimiento a tales principios, claro esta sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son consideradas por la misma ley como de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la aplicación del principio de buena fe ha manifestado la Corte Constitucional: "Este, en efecto no consiste en que el Estado deba someterse sin [illegible] posibilidad de evaluación a lo afirmado por los particulares. Implica sí que las autoridades presuman [illegible] que las personas actúan ante ellas de buena fe, pero siempre con la posibilidad correlativa de desvirtuar la presunción, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las consiguientes responsabilidades por violación de la Constitución o de las leyes (art. 6° C.N.)" (Sentencia T-381 de 14 de septiembre de 1993

RESOLUCIÓN NÚMERO 3935

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Ahora bien, cosa distinta es que ante la ausencia de un documento consistente en escrito de subsanación, con lo que se tenga en duda el cumplimiento de una formalidad, ha debido la Administración hacer el requerimiento en tal sentido con miras de dar primacía a las normas que regulan el derecho sustancial y remover de oficio los obstáculos puramente formales, con el fin de no declarar el desistimiento de la solicitud.

Así las cosas, faltando un documento que permita entender cumplidos los requisitos formales de la solicitud la actuación que corresponde es el requerimiento al interesado para que subsane con sujeción al plazo que señala la ley, lo que ciertamente no sucedió.

Encuentra, entonces este Despacho que no se ajustó de tal manera que evitara una decisión como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al solicitante de subsanar su solicitud en los aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se aclara que lo anterior aun cuando el recurrente presentó memorial de sustentación con el correspondiente ratificación de lo actuado por parte del señor Carlos R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Superintendencia suficientes razones para acceder a la revocatoria planteada y continuar la consecuente continuación del trámite.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 27347 de 2000 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin, envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado según poder que obra en autos, entregándole copia de la misma advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá D.C. a los 31 ENE. 2001

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO JOSE ARCHILA PEÑALOSA

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 35 No 7 - 25, piso 4
Bogotá D. C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDICTO No. 20408

145

RADICACION: 100 3458

LA SECRETARIA GENERAL AD - HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió la Resolución No. 28838 de 09 SET. 2002. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: La Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y CONSIDERANDO....

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la resolución 16194 de 2002 por medio de la cual se ordenó archivar un expediente, en consecuencia se ordena la continuación del trámite administrativo para tal fin envíese el extracto de publicación a la Oficina de Comunicaciones para lo de su competencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de esta resolución al doctor Carlos R. Olarte, a quien se reconoce personería como apoderado sustituto del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 09 SET. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

MÓNICA MURCIA PÁEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad - Hoc 09 OCT. 2002

Este edicto se desfija hoy 23 OCT. 2002 a las cinco (5:00 p.m.)

Secretaría General Ad - Hoc